



# Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Distr. general  
31 de mayo de 2023  
Español  
Original: francés

## Comité contra la Tortura

### Decisión adoptada por el Comité en virtud del artículo 22 de la Convención, respecto de la comunicación núm. 1049/2021\* \*\*

<i>Comunicación presentada por:</i>	Janbo Atilaw Melie (representado por un abogado de la organización AsyLex)
<i>Presunta víctima:</i>	El autor
<i>Estado parte:</i>	Suiza
<i>Fecha de la queja:</i>	24 de enero de 2021 (presentación inicial)
<i>Referencias:</i>	Decisión adoptada con arreglo a los artículos 114 y 115 del reglamento del Comité, transmitida al Estado parte el 26 de enero de 2021 (no se publicó como documento)
<i>Fecha de adopción de la decisión:</i>	5 de mayo de 2023
<i>Asunto:</i>	Expulsión a Etiopía
<i>Cuestión de procedimiento:</i>	Agotamiento de los recursos internos
<i>Cuestión de fondo:</i>	Riesgo de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
<i>Artículos de la Convención:</i>	3 y 16

1.1 El autor de la queja es Janbo Atilaw Melie, nacional de Etiopía nacido el 23 de diciembre de 1982. Presentó una solicitud de asilo en Suiza, pero fue rechazada. Se ha dictado contra él una orden de expulsión a Etiopía y sostiene que, al ejecutar esa orden, el Estado parte estaría vulnerando el artículo 3 de la Convención. El Estado parte formuló la declaración prevista en el artículo 22, párrafo 1, de la Convención el 2 de diciembre de 1986. El autor está representado por un abogado.

1.2 El 24 de enero de 2021, en aplicación del artículo 114 de su reglamento, el Comité, por conducto de su Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales, pidió al Estado parte que no expulsara al autor a Etiopía mientras se estuviera examinando su queja.

\* Adoptada por el Comité en su 76º período de sesiones (17 de abril a 12 de mayo de 2023).

\*\* Participaron en el examen de la comunicación los siguientes miembros del Comité: Todd Buchwald, Claude Heller, Erdogan Iscan, Liu Huawen, Maeda Naoko, Ana Racu, Abderrazak Rouwane, Sébastien Touzé y Bakhtiyar Tuzmukhamedov.



1.3 El 27 de enero de 2021, el Estado parte informó al Comité de que, de conformidad con su práctica habitual, la Secretaría de Estado de Migración había pedido a la autoridad competente que no adoptase ninguna medida para proceder a la expulsión del autor, de modo que este pudiera permanecer en Suiza mientras el Comité estuviese examinando su queja.

### Hechos expuestos por el autor

2.1 En 2005, el autor se afilió a la Coalición por la Unidad y la Democracia, un antiguo partido político etíope de la oposición también conocido como Kinijit, y participó en manifestaciones políticas. En junio de 2005 lo detuvieron en su lugar de trabajo y lo recluyeron en la prisión de Maekelawi, en Addis Abeba. Al cabo de 1 mes y 20 días, fue puesto en libertad bajo fianza. Al liberarlo lo advirtieron de que, si reincidía, lo volverían a encarcelar. Un mes después, por temor a ser detenido de nuevo, el autor abandonó Addis Abeba y se fue a vivir a Negele Boran. No tuvo más problemas con las autoridades, pero, al parecer, vivía con miedo a que lo volvieran a detener. En 2012, cuando trabajaba en una tienda, aprovechó la oportunidad de un viaje al extranjero que le propuso su empleador para ir al Sudán y abandonó el país.

2.2 El autor llegó a Suiza el 4 de julio de 2012 y solicitó asilo al día siguiente. Compareció en audiencias los días 5 y 20 de julio de 2012 y el 12 de junio de 2014. El 17 de junio de 2014, la Oficina Federal de Migración rechazó su solicitud de asilo. La Oficina observó que, tras haber sido encarcelado en 2005, el autor había podido vivir en Addis Abeba durante un mes y se había presentado ante las autoridades para obtener un nuevo documento de identidad, y después se había ido a vivir a Negele Boran hasta que había abandonado el país en 2012, sin que las autoridades etíopes lo hubiesen buscado o citado —y sin que su familia hubiese tenido problemas por su culpa—, lo que indicaba que su supuesta persecución ya había terminado. Además, si hubiese pesado sobre él una amenaza seria de encarcelamiento, se habría ocultado y no habría buscado oportunidades de empleo, no habría permanecido en el mismo lugar ni habría entablado contacto con varias personas.

2.3 El 18 de septiembre de 2014, el Tribunal Administrativo Federal confirmó la decisión de la Oficina Federal de Migración. Observó, entre otras cosas, que, aunque supuestamente había sido detenido por motivos políticos, tras su puesta en libertad el autor había vivido en su país de origen sin enfrentarse a ninguna dificultad hasta que se había marchado en 2012. El Tribunal consideró que el motivo por el que el autor había abandonado el país en 2012 no había sido la posible persecución sufrida en los años 2004 y 2005, sino el hecho de que se hubiera quedado sin empleo cuando su empleador había vendido la tienda en que trabajaba y se había marchado de Etiopía. Observó que el propio autor había afirmado que no había vuelto a desarrollar ninguna actividad política en su país de origen tras su supuesta detención. Además, las alegaciones del autor sobre las actividades políticas llevadas a cabo en el exilio —en particular, su participación en una concentración— se consideraron, en general, insuficientemente fundamentadas.

2.4 El 3 de junio de 2015, el autor presentó una nueva solicitud de asilo (solicitud de asilo múltiple), que justificó esencialmente invocando las actividades políticas llevadas a cabo en el exilio y el hecho de que, al parecer, un tribunal etíope había ordenado su detención en 2014, cuando él ya no se encontraba en el país, por incomparecencia ante la policía<sup>1</sup>. La Secretaría de Estado de Migración<sup>2</sup> rechazó la solicitud el 7 de septiembre de 2015. Observó, entre otras cosas, que el documento de la comisaría de policía de Addis Abeba presentado para demostrar que se había ordenado la detención del autor en su ausencia era una mera fotocopia y no aportaba ninguna prueba válida. Dado que el contenido también suscitaba dudas, la Secretaría de Estado consideró que, en su conjunto, el documento carecía de valor probatorio. También observó que, dado que no se podía suponer que el autor estuviese en el punto de mira de las autoridades etíopes en el momento de su salida del país, era poco probable que esas autoridades lo considerasen una amenaza en razón de su discreta actividad política en el exilio. La decisión de la Secretaría de Estado no fue recurrida y pasó a ser firme.

<sup>1</sup> El solicitante indica que obtuvo esta información a través de un conocido que vive en Etiopía.

<sup>2</sup> La Secretaría de Estado de Migración sustituyó a la Oficina Federal de Migración a partir del 1 de enero de 2015.

2.5 El autor afirma ser un miembro destacado y activo de la organización Ethiopian Human Rights and Democracy Task Force in Switzerland. Ha participado regularmente en las reuniones y protestas que organiza esta entidad contra el Gobierno de Etiopía, y una de sus principales tareas como miembro de la organización es abogar por la puesta en libertad de los presos políticos. Además, es un miembro muy activo de la Ethio-Swiss Sport & Culture Federation.

2.6 El 6 de febrero de 2020, el autor fue recluido en régimen de detención administrativa<sup>3</sup> con vistas a su expulsión, sin escolta, en un vuelo programado para el 28 de febrero de 2020, en el que se negó a embarcar. La diáspora etíope en Suiza organizó manifestaciones delante de la Embajada de Etiopía en Ginebra para protestar contra la reclusión del autor. Así pues, las autoridades etíopes saben quién es el autor. Además, durante mucho tiempo se negaron a expedirle un salvoconducto.

2.7 El 11 de septiembre de 2020, el autor presentó una solicitud de revisión. Alegó que había aumentado su notoriedad como opositor político y que la situación en Etiopía se había deteriorado gravemente. Se refirió a la manifestación celebrada en su apoyo delante de la Embajada de Etiopía y al asesinato de Hachalu Hundessa, un cantante de protesta etíope muy conocido. El 18 de septiembre de 2020, la Secretaría de Estado de Migración, tras haber examinado la situación en Etiopía y la actividad política del autor, decidió no admitir a trámite la solicitud de revisión y ordenó la expulsión. El autor interpuso un recurso. Adujo, entre otras cosas, que la Secretaría de Estado había indicado un plazo para recurrir erróneo.

2.8 El 26 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo Federal desestimó el recurso del autor. En relación con la situación en Etiopía, el Tribunal se refirió al cambio político que se había venido produciendo en el país desde la primavera de 2018, con la llegada del nuevo Gobierno, y a la integración de todas las fuerzas políticas, en particular las de la oposición, que había tenido lugar en ese contexto. El Tribunal señaló de nuevo que el autor había vivido en su país de origen sin enfrentarse a ninguna dificultad durante varios años antes de marcharse y que no había podido demostrar de forma convincente, en ninguno de los dos procesos de solicitud de asilo anteriores, que estuviera en el punto de mira de las autoridades de su país. El autor tampoco había podido demostrar, en relación con la actividad política llevada a cabo en el exilio, en qué medida las autoridades de su país de origen lo considerarían una amenaza.

2.9 Aunque el Tribunal Administrativo Federal reconoció que las manifestaciones celebradas delante de la Embajada podían haber contribuido a aumentar la notoriedad del autor, no consideró demostrado que por ello se le considerase una amenaza política. En cuanto a la demora en la expedición del salvoconducto, esta pareció deberse a que el autor había eludido en el pasado la obligación de abandonar el país y, en parte, la obligación de cooperar con las autoridades del país de origen, y a que entre tanto se había ocultado —se le había expedido ya un salvoconducto, que había caducado en abril de 2020—, aunque la presión ejercida sobre la Embajada parecía haber tenido cierto efecto. En este contexto, el Tribunal observó que finalmente se había expedido un salvoconducto válido al autor. Además, las tensiones existentes en Etiopía, particularmente en relación con el asesinato de un conocido cantante, no demostraban que el autor corriera un riesgo real y personal de persecución. El autor tampoco había demostrado de forma convincente y fundamentada que no disponía de una red de contactos sociales o económicos en Etiopía. En este contexto, el Tribunal subrayó que el autor había citado Addis Abeba y Negele Boran como ciudades de referencia y, por tanto, no tenía ningún vínculo con la región de Tigré, a la que se circunscribía el conflicto. Por otro lado, el Tribunal reconoció que la instancia inferior había indicado un plazo para recurrir erróneo, pero subrayó que el autor no había sufrido ninguna

<sup>3</sup> La reclusión fue ordenada y subsiguientemente prorrogada mediante resoluciones judiciales de 7 de febrero, 4 de mayo, 4 de agosto, 27 de octubre y 30 de noviembre de 2020 emitidas por un tribunal de Soleure. Se fundamentó invocando la conducta del autor, en particular sus repetidas desapariciones —el 6 de febrero de 2020 fue trasladado de Alemania a Suiza con arreglo al procedimiento de Dublín—, su negativa a embarcar en el vuelo reservado para él, su estancia ilegal en Suiza, que duraba ya varios años, y su constante negativa a regresar a su país, todo lo cual se consideró indicativo de que seguía tratando de evitar la expulsión.

desventaja jurídica concreta a consecuencia de ello, ya que había podido preparar e interponer un recurso.

2.10 El 15 de noviembre de 2020, las autoridades suizas procedieron a un nuevo intento de expulsión, con escolta policial, pero el autor se negó a subir al avión<sup>4</sup>. El autor fue puesto en libertad el 26 de noviembre de 2020, pero el 14 de enero de 2021 lo recluyeron en régimen de detención administrativa a fin de devolverlo a Etiopía en vuelo chárter el 27 de enero de 2021, acompañado por dos agentes de intervención y dos agentes de escolta.

### Queja

3.1 El autor sostiene que su expulsión a Etiopía constituiría una vulneración de los derechos que lo asisten en virtud del artículo 3 de la Convención. Afirma que, independientemente de lo que concluyera el Tribunal Administrativo Federal, hay razones fundadas para creer que, si fuese expulsado, sería sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por las autoridades etíopes.

3.2 El autor invoca la difícil situación política de Etiopía para justificar su temor a ser sometido a un trato arbitrario y a represión por las autoridades nacionales. La situación en Addis Abeba siguió deteriorándose desde 2015, hasta desembocar en un estado de violencia generalizada. En concreto, Etiopía se ha dotado de uno de los sistemas más avanzados del mundo para vigilar no solo a sus ciudadanos residentes en el país, sino también a los de la diáspora. Se han dirigido ciberataques también contra ciudadanos etíopes residentes en Suiza<sup>5</sup>. Por tanto, cabe esperar que las personas que desarrollan una actividad política en Suiza sean perseguidas si regresan, especialmente en vista de que Etiopía vigila las actividades de sus nacionales en Suiza.

3.3 El autor recuerda que ha protestado enérgicamente contra las violaciones de los derechos humanos y las privaciones de libertad ilegales de que es responsable el Gobierno de Etiopía. Por tanto, es muy conocido entre la diáspora etíope en Suiza y, tras las manifestaciones contra su expulsión celebradas delante de la Embajada de Etiopía, no cabe duda de que en su país se le considera disidente político y será perseguido por ello. También recuerda que en Etiopía era miembro del partido Kinijit y fue encarcelado por ese motivo. Además, invoca el efecto negativo que la expulsión tendría en su salud mental, así como el hecho de que podría ser víctima de la guerra civil en curso.

3.4 El autor alega que no se benefició del plazo de 30 días previsto por ley para recurrir, sino que solo dispuso de 5 días hábiles, debido a un error que el Tribunal Administrativo Federal reconoció en su resolución de 26 de octubre de 2020. Sin embargo, aunque el Tribunal observó que el autor había podido presentar su recurso en el plazo de cinco días y, por tanto, no había demostrado que hubiera sufrido una desventaja significativa, el autor aduce que tuvo que redactar el recurso precipitadamente, dado el reducido plazo de que dispuso. Por tanto, no tuvo tiempo para estudiar con atención la decisión que impugnaba y argumentar cabalmente sus alegaciones sobre los riesgos a que quedaría expuesto en caso de expulsión.

3.5 Por último, el autor alega que se vulneraría el artículo 16 de la Convención debido al riesgo de sufrir malos tratos que podría correr durante la expulsión<sup>6</sup>, ya que se ha previsto un procedimiento de “nivel 4”, muy criticado por la sociedad civil, los políticos y los defensores de los derechos humanos, así como por el Comité. Sostiene que el dispensar tales tratos —encadenamiento durante horas, traslado en silla de ruedas sin libertad de movimiento y obligación de llevar casco para controlar incluso la posición de la cabeza— a personas que, en su mayoría, son vulnerables y se encuentran traumatizadas solo puede calificarse de

<sup>4</sup> El autor alega que los agentes de policía que lo acompañaron al avión intentaron hacerlo obedecer utilizando la violencia: lo estrangularon y le dañaron el hombro. Afirma que sigue sufriendo a causa de la violencia infligida, pero que en el momento en que se presentó la comunicación al Comité no se disponía de su historia clínica.

<sup>5</sup> Human Rights Watch, “‘They know everything we do’ – Telecom and internet surveillance in Ethiopia”, 25 de marzo de 2014.

<sup>6</sup> Véase *Sonko c. España* (CAT/C/47/D/368/2008).

excesivo. Sin un médico a bordo del avión, el autor no tendrá acceso a asistencia médica en caso de necesitarla, lo que constituye de por sí un trato inhumano.

### **Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo**

4.1 El 18 de octubre de 2021, el Estado parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo. Recuerda la observación general núm. 4 (2017) del Comité, en cuyo párrafo 38 se establece que el autor debe demostrar que corre un riesgo personal, presente y fundado de ser sometido a tortura si es expulsado a su país de origen. La pertenencia a un grupo étnico, por sí sola, no basta para establecer la existencia de tal riesgo<sup>7</sup>. El riesgo debe fundarse en razones que vayan más allá de la pura teoría o sospecha. Además, deben alegarse hechos que demuestren que el riesgo es fundado. A continuación, el Estado parte se remite al párrafo 49 de la misma observación general para examinar el caso del autor a la luz de los diversos elementos que deben tenerse en cuenta a fin de concluir que existe tal riesgo.

4.2 Con respecto a la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos, el Estado parte afirma que tal circunstancia no constituye en sí misma un motivo suficiente para considerar que una persona podría ser víctima de tortura al regresar a su país de origen. El Comité debe determinar si el autor correría personalmente el riesgo de ser sometido a tortura en el país al que sería devuelto<sup>8</sup>. Deben aducirse otros motivos que permitan calificar el riesgo de tortura de “previsible, real y personal” a los efectos del artículo 3 de la Convención<sup>9</sup>. El Estado parte recuerda que el riesgo de tortura debe fundarse en razones que vayan más allá de la pura teoría o sospecha.

4.3 En cuanto a la situación general de los derechos humanos en Etiopía, el Tribunal Administrativo Federal se remitió a su sentencia doctrinal sobre la situación en ese país<sup>10</sup>. Según se expone en la sentencia, la situación ha evolucionado mucho, en particular desde que Abiy Ahmed, miembro del grupo étnico oromo, se convirtió en Primer Ministro en abril de 2018 y se propuso fortalecer la democracia con la participación de todas las fuerzas políticas. Aunque sigue habiendo conflictos étnicos en el país, se puede suponer que la situación política general evoluciona positivamente. Los disturbios que se produjeron en junio y julio de 2020 a raíz de la muerte del cantante de protesta Hachalu Hundessa no alteran esta apreciación. En cualquier caso, en Etiopía no impera una situación general de guerra, guerra civil o violencia generalizada, que justificaría presumir la existencia de un peligro concreto para el conjunto de la población civil. Además, el Tribunal subrayó que no se podía suponer que el autor fuera personalmente víctima de persecución política en su país de origen. El autor tampoco ha podido explicar con precisión quién lo perseguiría y por qué.

4.4 En cuanto al perfil político del autor, el Tribunal Administrativo Federal recordó que, independientemente de la credibilidad de su alegación sobre la reclusión por motivos políticos, había vivido en su país de origen sin enfrentarse a ningún problema durante varios años antes de marcharse. El autor no ha podido fundamentar de forma convincente la afirmación de que las autoridades lo estuvieron buscando cuando ya se encontraba fuera del país. Además, las actividades políticas que indicó haber llevado a cabo en el exilio no bastan para inferir que ha adquirido un perfil político destacado. Aunque tal vez haya cobrado cierta notoriedad a raíz de las protestas celebradas delante de la Embajada de Etiopía, no puede afirmarse que el Gobierno etíope lo considere una amenaza por ello.

4.5 Con respecto a las alegaciones de tortura o malos tratos sufridos en el pasado reciente y la existencia de pruebas independientes al respecto, el Estado parte subraya que los Estados partes en la Convención están obligados a tener en cuenta las alegaciones de este tipo al evaluar el riesgo de ser sometido a tortura que correría el autor de una queja en caso de ser devuelto a su país de origen. El Estado parte observa que el autor no afirma haber sido sometido a tortura o malos tratos en la exposición de los hechos que figura en su comunicación, sino que únicamente alega haber sido torturado, sin ofrecer más detalles,

<sup>7</sup> Z. Z. c. *el Canadá* (CAT/C/26/D/123/1998), párr. 8.5.

<sup>8</sup> K. N. c. *Suiza* (CAT/C/20/D/94/1997), párr. 10.2.

<sup>9</sup> *Ibid.*, párr. 10.5; y J. U. A. c. *Suiza* (CAT/C/21/D/100/1997), párrs. 6.3 y 6.5.

<sup>10</sup> Tribunal Administrativo Federal, sentencia D-6630/2018, 6 de mayo de 2019.

cuando plantea su reclamación relativa al artículo 3 de la Convención. Tampoco afirmó haber sido objeto de tales tratos ante las autoridades nacionales.

4.6 En cuanto a la actividad política desarrollada por el autor en su país de origen, las autoridades suizas observaron que, tras ser puesto en libertad en 2005, el autor había vivido en su país hasta 2012 sin tener problemas con las autoridades, pese a que no solo no se había ocultado, sino que había estado trabajando y, al parecer, había tenido contacto con las propias autoridades. Por tanto, puede considerarse que la alegación de que el autor fue perseguido en el período previo a su puesta en libertad ya no es pertinente, independientemente de su credibilidad. Las autoridades suizas observaron asimismo que los supuestos acontecimientos de 2004 y 2005 no habían sido la causa de la huida del autor, ya que, en ese caso, este habría abandonado el país antes y no en 2012, año en que su empleador había vendido su tienda para marcharse y él se había quedado sin empleo. El Tribunal Administrativo Federal consideró que esa había sido la razón por la que el autor había abandonado su país de origen y que, por tanto, sus temores de persecución eran infundados. El hecho de que el autor pudiera vivir durante varios años en su país de origen sin tener problemas con las autoridades demuestra que no estaba en el punto de mira de estas. Además, el propio autor afirmó que, tras ser detenido en 2005, no había realizado más actividades políticas en su país.

4.7 En cuanto a la actividad política desarrollada por el autor en Suiza, el Estado parte recuerda que en su segunda solicitud de asilo el autor afirmó ser miembro de la organización Ethiopian Human Rights and Democracy Task Force in Switzerland. En su resolución de 7 de septiembre de 2015, la Secretaría de Estado de Migración observó que el autor podría haber planteado esa alegación, y no lo había hecho, durante el proceso de solicitud de asilo que había finalizado con la resolución emitida por el Tribunal Administrativo Federal el 18 de septiembre de 2014. La Secretaría de Estado consideró, pues, que esa alegación se había formulado con el objetivo de retrasar la expulsión, y recordó que, según las constataciones de las autoridades nacionales suizas, el autor no estaba en el punto de mira de las autoridades etíopes en el momento de su salida del país. Por tanto, concluyó que no se podía suponer que las autoridades etíopes estuvieran vigilado al autor en Suiza. La Secretaría de Estado también recordó que las autoridades etíopes solo tenían interés en identificar a una persona si sus actividades se percibían como una amenaza para el sistema político. Además, la mera pertenencia a la mencionada organización no basta para reconocer la existencia de un riesgo de persecución por parte de las autoridades etíopes. El autor no ha demostrado ni argumentado de forma convincente que las autoridades etíopes tuvieran conocimiento de esas actividades. La Secretaría de Estado observó que el autor en absoluto formaba parte del “núcleo duro” de los opositores del régimen en el exilio, que eran quienes interesaban a las autoridades. Por tanto, concluyó que era poco probable que las autoridades del país de origen consideraran al autor una amenaza en razón de su discreta actividad política en el exilio.

4.8 En cuanto a la credibilidad del autor y la coherencia de los hechos expuestos, el Estado parte recuerda que las autoridades suizas competentes en materia de asilo establecieron que el relato del autor sobre los motivos que lo habían llevado a abandonar su país no era creíble. Dado que el autor había vivido en su país de origen de 2005 a 2012 sin tener problemas con las autoridades etíopes, las autoridades suizas concluyeron que la alegación de que los acontecimientos de 2004 y 2005 habían sido la causa de su huida no era creíble. También consideraron que la alegación de que el autor había sido perseguido en el período previo a su puesta en libertad ya no era pertinente, independientemente de su credibilidad.

4.9 Por lo que respecta a la alegación del autor de que sufre un grave malestar psíquico a causa de su temor a ser expulsado, el Estado parte observa que el autor no presentó ningún certificado médico para acreditar su estado de salud ni en el marco de las actuaciones internas ni ante el Comité. Los problemas psicológicos que menciona guardan relación con la denegación de las solicitudes de asilo presentadas en Suiza y no pueden atribuirse a una persecución sufrida en su país de origen.

4.10 Por último, en cuanto a las alegaciones relativas a la ejecución de la orden de expulsión, el Estado parte señala que el autor no las planteó ante las autoridades nacionales y, por tanto, son inadmisibles. Por consiguiente, en vista de lo que antecede, el Estado parte considera que el autor no ha demostrado que existan razones fundadas para temer que correría un riesgo concreto y personal de ser sometido a tortura en caso de regresar a Etiopía.

### Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado parte

5.1 El 24 de enero de 2022, el autor alegó que el Estado parte no había indicado qué recursos se podían interponer contra un procedimiento de “nivel 4” y que, en la práctica, las autoridades suizas no informaban ni al solicitante de asilo ni a su representante sobre el método de expulsión, el nivel de coacción previsto, la fecha del vuelo u otros detalles, y que supo que el procedimiento iba a ser de “nivel 4” porque obtuvo “por casualidad” una copia del correo electrónico enviado por la Secretaría de Estado de Migración a la autoridad cantonal. Dada la falta de información oficial a este respecto, el autor considera que el Estado parte no ofrece ni desea ofrecer vías de recurso.

5.2 El autor refuta el análisis del Estado parte sobre la situación en Etiopía, que no está respaldado por ningún informe. Aunque el autor no procede de la región de Tigré, donde se originó el conflicto, este se ha extendido por todo el país<sup>11</sup>. Es más, la situación se ha deteriorado desde que el autor presentó la comunicación al Comité. El 4 de noviembre de 2021, el Gobierno de Etiopía se atribuyó facultades excepcionales<sup>12</sup> cuyo ejercicio entraña una restricción arbitraria de los derechos humanos y compromete la independencia del poder judicial. Dada la inestabilidad imperante en Etiopía, y en vista del perfil político del autor, descrito anteriormente, cabe suponer que este correrá un elevado riesgo de ser torturado si es devuelto a Etiopía.

5.3 El autor afirma que fue torturado cuando estuvo encarcelado y que así lo explicó en las quejas que dirigió a las autoridades suizas. Además, las autoridades suizas no han impugnado esta alegación.

5.4 El autor alega que la única forma que tenía de evitar un nuevo encarcelamiento era esconderse en Negele Boran. Si es devuelto a Etiopía, ya no podrá ocultarse, puesto que ahora las autoridades etíopes lo conocen en su faceta de disidente político. Ha sido un miembro muy activo de la comunidad política etíope en el exilio, de lo contrario no se habrían celebrado manifestaciones en su apoyo delante de la Embajada de Etiopía en Ginebra. Así pues, no cabe duda de que sus actividades políticas son conocidas por las autoridades etíopes, que lo vigilan desde que se celebraron esas manifestaciones. Además, las autoridades etíopes ya han dictado una orden de detención en su contra, aunque el Estado parte cuestione el valor probatorio del documento.

5.5 Por último, el autor se refiere a su estado de salud. A este respecto, presenta un informe médico de 12 de enero de 2022, en el que se indica, entre otras cosas, que estuvo encarcelado cinco años en Etiopía a causa de sus actividades políticas y que, durante un intento de expulsión, diez policías suizos lo agredieron para devolverlo por la fuerza, lo esposaron y le retorcieron y dislocaron el brazo izquierdo. En el informe médico se diagnostica al autor trastorno por estrés postraumático y depresión reactiva grave. El autor alega que en Etiopía no tendría acceso a un tratamiento adecuado y, por tanto, al devolverlo se estaría vulnerando el artículo 14 de la Convención.

### Deliberaciones del Comité

#### *Examen de la admisibilidad*

6.1 Antes de examinar toda queja formulada en una comunicación, el Comité debe decidir si esta es admisible en virtud del artículo 22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 22, párrafo 5 a), de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional.

6.2 El Comité recuerda que, de conformidad con el artículo 22, párrafo 5 b), de la Convención, no examinará ninguna comunicación de una persona a menos que se haya cerciorado de que la persona ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda disponer. Observa que, en el presente caso, el autor aportó una copia de un correo

<sup>11</sup> ONU info, “Éthiopie : l’avenir du Tigré et de la Corne de l’Afrique est ‘très incertain’”, 8 de noviembre de 2021.

<sup>12</sup> Declan Walsh y Simon Marks, “Ethiopia declares state of emergency as rebels advance toward capital”, *The New York Times*, 2 de noviembre de 2021.

electrónico supuestamente enviado por la Secretaría de Estado de Migración a las autoridades cantonales encargadas de su expulsión, en el que se indicaba la fecha programada y se especificaba que el autor iría acompañado por dos agentes de intervención y dos agentes de escolta. El Comité toma nota de las críticas del autor sobre lo que describe como un procedimiento de “nivel 4”. El Estado parte afirma que el autor no planteó esas quejas ante las autoridades nacionales. En primer lugar, el Comité no puede hacer conjeturas sobre la forma en que se llevaría a cabo la expulsión del autor si se procediera a ella. En segundo lugar, el Comité observa que el autor se limita a afirmar que no existen recursos internos, pero no especifica si intentó impugnar las condiciones de su expulsión ante las autoridades competentes o averiguar qué recursos tenía a su disposición a tal efecto. En particular, el autor no explica por qué no planteó la cuestión ante la autoridad que decidió la forma en que se ejecutaría la expulsión una vez que obtuvo información al respecto “por casualidad”. El Comité recuerda que las meras dudas sobre las posibilidades de que los recursos internos prosperen o resulten eficaces no eximen a los autores de la obligación de agotarlos. Por ello, el Comité concluye que, de conformidad con el artículo 22, párrafo 5 b), de la Convención, esta reclamación es inadmisibles porque no se han agotado los recursos internos.

6.3 El Comité observa que el autor no alegó que se había vulnerado el artículo 14 de la Convención hasta que formuló sus comentarios sobre las observaciones del Estado parte y que, por tanto, tal alegación no formaba parte de los argumentos a que debía responder el Estado parte en relación con la admisibilidad y el fondo. El autor no indicó por qué no había podido plantear esta alegación en una fase anterior del procedimiento. Por consiguiente, el Comité considera que esta alegación es inadmisibles en virtud de lo dispuesto en el artículo 22, párrafo 2, de la Convención.

6.4 En cambio, el Comité considera que la queja plantea cuestiones sustantivas en relación con el artículo 3 de la Convención que deben examinarse en cuanto al fondo. El Comité no encuentra ningún otro obstáculo para la admisibilidad de la comunicación y, por tanto, la declara admisible y procede a examinarla en cuanto al fondo.

#### *Examen de la cuestión en cuanto al fondo*

7.1 De conformidad con el artículo 22, párrafo 4, de la Convención, el Comité ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes.

7.2 En el presente caso, el Comité debe determinar si la expulsión del autor a Etiopía supondría el incumplimiento de la obligación que tiene el Estado parte en virtud del artículo 3, párrafo 1, de la Convención de no proceder a la expulsión o la devolución de una persona a otro Estado cuando haya razones para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.

7.3 El Comité debe evaluar si hay razones fundadas para creer que el autor correría un riesgo personal de ser sometido a tortura a su regreso a Etiopía. Al evaluar ese riesgo, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones del caso, con arreglo al artículo 3, párrafo 2, de la Convención, incluida la posible existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. Sin embargo, el Comité recuerda que el objetivo de este análisis es determinar si el interesado correría personalmente un riesgo previsible y real de ser sometido a tortura en el país al que sería devuelto. De ahí que la existencia en un país de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos no constituya de por sí un motivo suficiente para establecer que una persona determinada estaría en peligro de ser sometida a tortura al ser devuelta a ese país. Deben aducirse otros motivos que permitan considerar que el interesado estaría personalmente en peligro. A la inversa, la inexistencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos no significa que deba excluirse la posibilidad de que una persona esté en peligro de ser sometida a tortura en su situación particular. Además, el Comité observa que, dado que Etiopía no ha formulado la declaración prevista en el artículo 22, párrafo 1, de la Convención, en el caso de que en ese país se vulneraran los derechos que asisten al autor en virtud de la Convención, este se vería

privado de la posibilidad legal de recurrir al Comité para obtener cualquier forma de protección<sup>13</sup>.

7.4 El Comité hace referencia a su observación general núm. 4 (2017), en la que indicó que el riesgo de tortura debe fundarse en razones que vayan más allá de la pura teoría o sospecha. Recuerda que, si bien no es necesario demostrar que el riesgo es “muy probable”, la carga de la prueba recae generalmente en el autor, quien debe presentar un caso defendible para demostrar que corre un riesgo “previsible, real y personal”<sup>14</sup>. El Comité recuerda también que, de conformidad con su observación general núm. 4 (2017), otorga una importancia considerable a la determinación de los hechos dimanante de los órganos del Estado parte de que se trate, pero no está vinculado por ella, sino que está facultado, de conformidad con el artículo 22, párrafo 4, de la Convención, para evaluar libremente los hechos teniendo en cuenta todas las circunstancias de cada caso<sup>15</sup>.

7.5 En el presente caso, el Comité observa que el autor afirma haber sido encarcelado y torturado en Etiopía por su actividad política y que se ordenó su detención en su ausencia. El Comité observa, en primer lugar, que, en la descripción de los hechos que figura en su comunicación, el autor no alega haber sido torturado por las autoridades etíopes en el pasado. Afirma que fue torturado en prisión en el contexto de su reclamación relativa al artículo 3 de la Convención. En concreto, señala que fue “privado de libertad arbitrariamente y torturado” y que ha sido “víctima de tortura y trato inhumano”, sin facilitar más detalles. El Comité observa asimismo que las autoridades suizas examinaron debidamente la forma y el fondo del supuesto escrito de la comisaría de Addis Abeba destinado a probar que se había ordenado la detención del autor en su ausencia —que este no presentó al Comité—, y cuestionaron su autenticidad. En particular, el Comité observa que, al parecer, las autoridades suizas no pusieron en duda la credibilidad de las alegaciones del autor sobre el presunto encarcelamiento de que fue objeto en 2005 en Etiopía por motivos políticos. En cambio, no consideraron creíbles las alegaciones de que lo que lo había llevado a huir del país en 2012 había sido su participación en las manifestaciones políticas de 2005, por la que había sido encarcelado durante 1 mes y 20 días. El Comité observa que el autor no ha presentado ninguna prueba que respalde sus alegaciones.

7.6 El Comité observa además que, según el Estado parte, las actividades políticas llevadas a cabo por el autor en Suiza no constituyen una actividad sostenida e intensa que pueda ser considerada una amenaza por el Gobierno etíope. El Comité también toma nota del informe médico de 12 de enero de 2022, en el que se establece la existencia de un trastorno por estrés postraumático. Sin embargo, el Comité observa que el autor no ofrece ninguna explicación sobre la discrepancia entre el período de encarcelamiento de 5 años mencionado en ese informe médico y el de 1 mes y 20 días que se indicó a las autoridades suizas competentes en materia de asilo.

7.7 Ahora bien, el Comité observa que, incluso si aceptara la alegación de que el autor fue sometido a tortura y malos tratos en el pasado, la cuestión que debe examinar es si actualmente el autor correría el riesgo de ser torturado en caso de ser devuelto por la fuerza a Etiopía. El Comité recuerda además su jurisprudencia según la cual incumbe generalmente al autor presentar un caso defendible<sup>16</sup>.

7.8 El Comité es consciente de que la situación de los derechos humanos en Etiopía sigue siendo preocupante en muchos aspectos<sup>17</sup>. No obstante, recuerda que la existencia de violaciones de los derechos humanos en el país de origen no constituye en sí un motivo suficiente para concluir que el autor de una queja corre un riesgo personal de ser sometido a tortura en ese país. El Comité observa además que el autor tuvo numerosas oportunidades

<sup>13</sup> *Tahmuresi c. Suiza* (CAT/C/53/D/489/2012), párr. 7.7.

<sup>14</sup> Véanse, en particular, *M. A. R. c. los Países Bajos* (CAT/C/31/D/203/2002), párr. 7.3; y *Dadar c. el Canadá* (CAT/C/35/D/258/2004), párr. 8.4.

<sup>15</sup> Comité contra la Tortura, observación general núm. 4 (2017), párrs. 11, 39 y 50.

<sup>16</sup> Véanse, por ejemplo, *S. L. c. Suecia* (CAT/C/26/D/150/1999), párr. 6.3; *M. M. A. K. c. Alemania* (CAT/C/32/D/214/2002), párr. 13.5; *Zare c. Suecia* (CAT/C/36/D/256/2004), párr. 9.3; *C. A. R. M. y otros c. el Canadá* (CAT/C/38/D/298/2006), párr. 8.10; y *N. B-M. c. Suiza* (CAT/C/47/D/347/2008), párr. 9.9.

<sup>17</sup> Véase CAT/C/ETH/CO/2.

para fundamentar y detallar sus alegaciones ante la Secretaría de Estado de Migración y el Tribunal Administrativo Federal. Sin embargo, las pruebas aportadas no permiten concluir que su participación en actividades políticas en Etiopía y Suiza lo expondría al riesgo de ser sometido a actos de tortura o a tratos inhumanos o degradantes a su regreso a Etiopía.

7.9 Por último, el Comité observa que, en el marco de una solicitud de revisión presentada por el autor, la primera instancia indicó un plazo para recurrir erróneo, y así lo confirmó la segunda instancia. Sin embargo, aunque lamenta que el autor no pudiera beneficiarse del plazo legal, que era más extenso, el Comité toma nota del argumento aducido en la resolución de 26 de octubre de 2020 del Tribunal Administrativo Federal de que el autor no demostró haber sufrido ninguna desventaja jurídica concreta a consecuencia de ese error, ya que pudo preparar e interponer su recurso.

7.10 Sobre la base de la información de que dispone, el Comité considera que el autor no ha demostrado que sus actividades políticas sean lo suficientemente importantes para haber captado el interés de las autoridades de su país de origen, y concluye que la información proporcionada no demuestra que el autor correría un riesgo personal, presente, previsible y real de ser sometido a tortura si fuese devuelto a Etiopía<sup>18</sup>.

8. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el Comité estima que la información presentada por el autor no es suficiente para demostrar que correría un riesgo personal, previsible y real de ser sometido a tortura en caso de ser expulsado a Etiopía. En vista de las conclusiones del Comité sobre la situación actual de los derechos humanos en Etiopía<sup>19</sup>, que parece haber empeorado desde que el Tribunal Administrativo Federal emitió su resolución de 26 de octubre de 2020, el Comité considera que, antes de ejecutar su decisión de expulsar al autor, el Estado parte debería llevar a cabo una evaluación exhaustiva de la situación actual de los derechos humanos en Etiopía y de la situación médica del autor, a la luz del informe médico de 12 de enero de 2022.

9. El Comité, actuando en virtud del artículo 22, párrafo 7, de la Convención, concluye que la expulsión del autor a Etiopía no constituiría una vulneración del artículo 3 de la Convención por el Estado parte.

---

<sup>18</sup> Véanse, por ejemplo, *M. K. c. Suiza* (CAT/C/60/D/662/2015), párrs. 7.8 y 7.9; y *D. R. c. Suiza* (CAT/C/63/D/673/2015), párr. 7.9.

<sup>19</sup> Véase CAT/C/ETH/CO/2.